



NUE 91-A-2020 (RG)

_____ contra Presidencia de la República

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del once de noviembre de dos mil veinte.

Descripción del caso:

A. _____ en adelante “el apelante” o “el recurrente”, presentó recurso de apelación contra la resolución bajo referencia UAIP-118-2020, emitida el día 6 de julio de 2020 por la oficial de información de la **Presidencia de la República** (en adelante “CAPRES” o “el ente obligado”). La información solicitada y objeto del presente procedimiento es la siguiente:

1. Listado con número y nombre de los cargos públicos que ejerce o ha ejercido el actual Secretario Jurídico de la Presidencia, _____, desde junio de dos mil diecinueve hasta la fecha, detallando la siguiente información para cada cargo: (1) fecha de inicio de labores, (2) fecha de culminación de labores (si aplica) y (3) remuneración detallada mes a mes.

2. Contratos vigentes y vencidos, en formato PDF, entre el _____ y la Presidencia de la República, desde junio de dos mil diecinueve hasta la fecha.

Al respecto, señaló el apelante que la oficial de información de CAPRES resolvió: que con respecto a la remuneración del cargo de Asesor Jurídico se le indicó que este puede ser verificado en el Portal de Transparencia y puede ser consultado en el siguiente link <https://www.transparencia.gob.sv/institutions/capres>. En relación a los contratos solicitados, se adjuntó copia de los mismos en versión pública, en aplicación al art. 30 de la LAIP, omitiendo datos de identidad, domicilio, edad, etc.

Por su parte, el apelante se mostró inconforme con dicha resolución, expresando que luego de buscar por varias horas no encontró la información solicitada en el enlace indicado,



lo cual puede deberse a que la información o no se encuentra disponible o está reportada de tal forma que el acceso a la misma sea de difícil a imposible de obtener; lo cual da como resultado el incumplimiento al deber de informar y la denegatoria tácita de la información solicitada; por lo que estima que se ha violentado los principios de Máxima Publicidad, Disponibilidad e Integridad, establecidos en el art. 4 de la LAIP.

Aunado a lo anterior, señala que la oficial de información no incluyó en su resolución el contrato referente al cargo de Secretario Jurídico, el cual se ha mencionado que se desempeña de forma Ad-Honorem, siendo la exhibición del mismo uno de los puntos de su solicitud de información. Finalmente, solicitó la admisión del recurso y se le ordene a CAPRES que entregue la información requerida.

B. En esa línea, este Instituto admitió la apelación y designó a la entonces Comisionada Silvia Cristina Pérez Sánchez, para instruir el procedimiento y proponer un proyecto de resolución. Sin embargo, al haber finalizado su período de suplencia, se reasignó el caso al Comisionado **Ricardo José Gómez Guerrero**.

El informe al que se refiere el artículo 88 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), no fue rendido. De igual forma, el expediente administrativo no fue remitido conforme a lo que mandata el artículo 82 inciso segundo de la misma ley, pese a existir evidencia que la notificación fue realizada en tiempo y forma.

Llegado el día y hora de la audiencia (realizada de forma virtual), compareció únicamente el apelante Héctor Raúl Silva Hernández, por medio de la Plataforma “Meet” de Google. No obstante, en la etapa de incidentes, el Pleno de este Instituto expuso que a las ocho horas y cuarenta y un minutos de ese día, el licenciado [REDACTED], actuando en su calidad de apoderado especial del Presidente de la República Nayib Armando Bukele Ortiz, remitió escrito por medio del cual informó, en lo medular, que la Presidencia de la República no había sido debidamente notificada de la admisión del presente procedimiento, y en consecuencia, no tenían conocimiento de la realización de la presente audiencia oral sino hasta que les llegó en enlace para comparecer a la misma; en tal sentido, en virtud del principio de eventualidad, solicitó que si se tratase de un recurso interpuesto contra alguna decisión de dicho ente, se declare la nulidad de pleno derecho de la resolución

de admisión emitida por este Instituto en el presente procedimiento, de conformidad al artículo 36 letra “b” de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Seguidamente, se le corrió traslado al apelante para que pudiera pronunciarse con relación a la petición del ente obligado. Posteriormente, el Pleno procedió a deliberar con relación al incidente planteado por el ente obligado, y finalmente resolvió por mayoría declarar sin lugar el mismo, expresando los motivos de su decisión en dicho acto. Por tanto, se realizó la audiencia oral únicamente con la parte apelante, quien señaló que no ofrecería ningún elemento probatorio para ser incorporado al expediente. Posteriormente, se llevó a cabo la fase de alegatos, en donde el apelante ratificó su postura y petición planteada en el recurso de apelación.

Análisis del caso:

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) Breve referencia al derecho de acceso a la información pública (DAIP); (II) Análisis del caso en concreto; y, (III) Exhorto a la oficial de información sobre el cumplimiento de requerimientos realizados por este Instituto.

I. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información, contenido en el Artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII□O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que

¹ Corte I.D.H., *Caso Claude Reyes y otras Vs. Chile*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.



establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones²”.

En ese orden, el Art. 4 letra “a” de la LAIP establece la máxima publicidad como principio rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. Entonces, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la Corte IDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”³.

También, se puede interpretar que los efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados⁴, son que: a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁵; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada⁶; y, c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación⁷.

En relación a las limitaciones al DAIP se ha pronunciado la “Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión”, en la que se efectuó una formulación sintética de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al derecho de acceso a la información: que “el derecho de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y

² CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), *Principios sobre el derecho de acceso a la información*, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.p

³ CIDH- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

⁴ El Art. 7 de la LAIP, contiene quiénes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁵ Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

⁶ Idem

⁷ Idem

privados preponderantes, incluida la privacidad”, que “las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información”, y que “la autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar que la información está amparada por el sistema de excepciones”⁸.

II. Una vez establecido lo anterior, es pertinente señalar que el objeto del presente procedimiento será determinar si la información solicitada por la parte apelante ha sido entregada en su totalidad o no por parte de la presidencia de la República.

Para el caso en comento, el ente obligado no ha incorporado al expediente ninguna documentación para ser valorada. En ese sentido, el análisis del caso se centrará en los argumentos expuestos por la parte apelante y la documentación anexa a su recurso de apelación, siendo esta la siguiente:

a) Resolución de las trece horas del seis de julio de dos mil veinte, de referencia UAIP-118-2020, emitida por la oficial de información de la Presidencia de la República, siendo esta el objeto de impugnación de la parte apelante.

De dicha resolución, se advierte que la oficial de información del ente obligado dio trámite a la solicitud de información del apelante; asimismo, la misma fue resuelta en sentido positivo, en un inicio, puesto que la misma señala que se concede el acceso a la información solicitada.

b) Nota de fecha dos de julio de dos mil veinte, de referencia N-085-RRHH-2020, suscrita por la Gerente de Recursos Humanos de la Presidencia de la República.

En relación a este punto, se advierte que la Gerente de Recursos humanos concede el acceso a ciertos datos de los solicitados por el apelante, así como los contratos que describen la relación laboral entre el servidor público [REDACTED] y la Presidencia de la República, en versión pública. No obstante, con dicha versión pública se

⁸ Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004). Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp



omitió entregar al apelante el salario que devenga el servidor público Conan Tonathiu Castro Ramírez.

Determinado lo anterior, se advierte que a esta fecha el ente obligado **no ha entregado la información solicitada por el ciudadano [REDACTED]**, en los términos requeridos por este último. Por consiguiente, mediante los criterios de valoración relativos al interés público, el principio de máxima publicidad, integridad, rendición de cuentas, la transparencia y la naturaleza del derecho a la información pública, es pertinente proporcionar al apelante: *el listado con número y nombre de los cargos públicos que ejerce o ha ejercido el actual Secretario Jurídico de la Presidencia, [REDACTED] desde junio de dos mil diecinueve hasta la fecha, detallando la siguiente información para cada cargo: (1) fecha de inicio de labores, (2) fecha de culminación de labores (si aplica) y (3) remuneración detallada mes a mes; y, los contratos vigentes y vencidos, en formato PDF, entre el [REDACTED] y la Presidencia de la República, desde junio de dos mil diecinueve hasta la fecha, pues ello, constituye información pública, y su entrega favorece a la contraloría social. Este criterio ha sido sostenido por este Instituto en algunas resoluciones definitivas similares al presente procedimiento, como son los casos NUE 54-A-2019, NUE 59-A-2019, NUE 231-A-2019, entre otros.*

Ahora bien, con relación al **período de tiempo** al que obedece la información solicitada por el apelante, si bien su requerimiento dice textualmente “desde junio de dos mil diecinueve a la fecha”, el período comprendido que debe entenderse es **desde el mes de junio del año 2019 al 21 de mayo de este año (2020)**, puesto que la solicitud de información fue interpuesta en esa fecha; dato que se tiene por acreditado en razón de estar relacionado en la resolución UAIP-118-2020 objeto de este caso (folio del 5 al 8 del presente expediente).

Por todo lo anterior, es procedente modificar la resolución de la oficial de información de la **Presidencia de la República** de conformidad al principio de máxima publicidad establecido en el artículo 4 letra “a” de la LAIP; por ende, se debe ordenar al ente obligado que proporcione la información requerida en los términos solicitados por el apelante.

No obstante, tal y como resolvió la oficial de información en un inicio, en el caso de los contratos, estos deben ser entregados en versión pública, de conformidad al art. 30 de la LAIP, es decir, omitiendo de su contenido datos personales tales como: dirección de residencia, domicilio, número de documento único de identidad, números de identificación tributaria, entre otros datos personales que pudieran aparecer consignados en dicha documentación y que sean susceptibles de ser protegidos; salvo el salario que devenga el servidor público [REDACTED], por ser parte del requerimiento del apelante y por ser un dato eminentemente público. Aunado a lo anterior, de haberse entregado los contratos sin tachar el salario devengado, no era necesario que la oficial de información re-direccionara al apelante al Portal de Transparencia de la Presidencia de la República para obtener esta información, y, en consecuencia, se hubiera tenido por satisfecha su pretensión en relación a este punto.

Al respecto, este Instituto considera que la respuesta emitida por la oficial de información, es contraria al principio de máxima publicidad y disponibilidad de conformidad con el Art. 4 letras "a" y "b" de la LAIP, pues la remisión a los solicitantes al portal de transparencia para dar por satisfecha la entrega de la información, se cumple siempre y cuando esta se encuentre identificada de forma clara y precisa, contrario a lo que en este caso ha sucedido, pues al revisar el apartado de las remuneraciones y al buscar la plaza de asesor jurídico se constata que existen varias de esa naturaleza, con salarios que van desde el orden de los \$2,000 a \$8,000, sin tener la certeza cuál de ellas, es la que posee el servidor público [REDACTED].

De igual forma, con relación al cargo ad-honorem de Secretario Jurídico que desempeña el servidor público [REDACTED], deberá entregarse también este contrato o el documento análogo en donde se le atribuye este cargo en carácter ad-honorem al referido servidor público (es decir, llámese acuerdo, contrato etc.), esto debido a que el administrado no tiene el deber de saber qué tipo de documento o contratación es la aplicada para ciertos cargos, lo cual debe ser orientado por la oficial de información de acuerdo al Art. 68 de la LAIP. Este tipo de actuaciones pueden llegarse a aseverar contrarias a la transparencia, diligencia y ética con las que se debe desempeñar el cargo.



III. Finalmente y en relación a los párrafos que anteceden, durante la tramitación del presente procedimiento se advierte que la oficial de información de la **Presidencia de la República**, no remitió el expediente administrativo con base al Art. 82 de la LAIP, pese a que el caso fue notificado en debida forma, tal y como se resolvió durante la etapa de incidentes de la audiencia oral realizada para el presente procedimiento, con relación al escrito presentado por el ente obligado en el que solicitaban la nulidad de la admisión del caso.

Dicha circunstancia representó, de manera evidente, un entorpecimiento e inclusive una posible dilación al procedimiento de apelación que es conocido dentro de este Instituto, lo cual de acuerdo al Art. 6 literal i) de la Ley de Ética Gubernamental (LEG) podría constituir una prohibición ética, lo cual tiene como posible consecuencia el inicio del procedimiento de investigación del empleado o empleados públicos que cometieron dicha prohibición de acuerdo a lo que se señala en el Art. 30 de la LEG, y cuya comprobación del hecho puede suponer la imposición de una multa de entre uno a cuarenta salarios mínimos urbanos del sector comercio tal como dispone el Art. 42 LEG.

Por lo tanto, resulta pertinente hacer un llamado de atención a la oficial de información de la Presidencia de la República, para que se dé respuesta a todos y cada uno de los requerimientos que se emanen de esta Administración, con la finalidad de no entorpecer los procedimientos que se tramitan en este Instituto, ello sin el perjuicio de adoptar las medidas disciplinarias que resulten pertinentes en caso se reitere dicha la conducta omisiva de dar cumplimiento a los requerimientos que se realicen por parte de este Instituto. En consecuencia, se le exhorta en este acto para que sus actuaciones sean en pro del acceso a la información de la población, a fin de garantizar este derecho contenido en el art. 2 de la LAIP.

Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, las disposiciones legales citadas, y los artículos 6 y 18 de la Constitución, 52 inciso 3 °, 58 letras b, d y g; 94 y 96 letra “d” de la LAIP; y, 79 y 80 del Reglamento de la LAIP, este Instituto resuelve:

a) **Modificar** la resolución UAIP-118-2020, emitida por la oficial de la **Presidencia de la República** el seis de julio de dos mil veinte, por los motivos expuestos en la presente resolución.

b) **Ordenar** al titular de la **Presidencia de la República**, que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, entregue al ciudadano [REDACTED], la información completa (en versión pública) concerniente a: *1) listado con número y nombre de los cargos públicos que ejerce o ha ejercido el actual Secretario Jurídico de la Presidencia, [REDACTED], desde junio de dos mil diecinueve hasta el 21 de mayo de 2020, detallando la siguiente información para cada cargo: (i) fecha de inicio de labores, (ii) fecha de culminación de labores (si aplica) y (iii) remuneración detallada mes a mes, y, 2) Contratos vigentes y vencidos, en formato PDF, entre el [REDACTED] y la Presidencia de la República, desde junio de dos mil diecinueve hasta el 21 de mayo de 2020; por ser información de naturaleza eminentemente pública. Lo anterior, deberá ser entregado en los términos expuestos en el romano II del apartado “análisis del caso” de la presente resolución.*

c) **Requerir** al titular de la **Presidencia de la República** que en el plazo de veinticuatro horas luego de fenecido el plazo del literal anterior, remita a este Instituto el informe de cumplimiento, junto con la documentación pertinente que acredite la entrega de la información y la conformidad del apelante con la misma. Este informe también podrá ser remitido vía electrónica a la dirección de oficialreceptor@iaip.gob.sv.

d) **Hacer** un llamado de atención a la oficial de información de la **Presidencia de la República** a fin de que cumpla con los requerimientos emitidos por esta Administración, a modo de facilitar los procedimientos y a no entorpecerlos por los retardos en los requerimientos, bajo pena de iniciar un procedimiento sancionatorio ante el TEG por el posible cometimiento de infracciones a las normas éticas dentro de la administración pública.

e) **Hacer saber** a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

f) Remitir el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto, para que verifique la ejecución de esta resolución.

g) Publíquese oportunamente la presente resolución.


Notifíquese. –



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

JH/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veinte.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP

